

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. LIC. ALBERTO CANTÚ SÁNCHEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PREVIO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL REMITE 6 ESCRITOS PRESENTADOS POR EL C. FELIPE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENEN LAS INICIATIVAS DE REFORMA A DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA HACENDARIA.

INICIADO EN SESIÓN: 22 de noviembre del 2021

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Presupuesto.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, Felipe Enríquez Hernández, [REDACTED]

[REDACTED] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION LOS ARTICULOS 159 BIS Y 159 BIS 1 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleonenses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

"los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

"Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor."

Es de señalar que la “baja por caducidad” de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente 12372/LXXV, presentada en sesión el 17 de diciembre del 2018, turnada a la comisión de Presupuesto y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2018 Expediente:12372/LXXV

PROMOVENTE.- DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION LOS ARTICULOS 159 BIS Y 159 BIS 1 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 17 de diciembre del 2018

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Presupuesto

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de brindar estímulos fiscales a los contribuyentes que inviertan en la innovación social.

Considero que la inversión en la innovación social equivale a invertir en la creatividad, en la posibilidad de encontrar nuevas soluciones a los viejos conflictos sociales, equivale a apostar en la capacidad del ser humano para transformar de manera positiva su entorno y verlo como agente positivo de cambio.

La comisión europea define a la innovación social como el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios o modelos) que satisfacen necesidades sociales y crean una nueva relación o colaboración. Representa nuevas respuestas a la presión de las demandas sociales que afectan los procesos de la interacción social. Está dirigido a mejorar el bienestar humano, y tanto sus fines como sus medios pretenden involucrar a la sociedad en general. La innovación social no sólo ayuda a la sociedad, sino también mejora la capacidad de las personas para actuar.

Este proceso de innovación se basa en la inventiva de los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la comunidad local, así como los servidores de empresas de negocios y públicas con el fin de crear nuevas soluciones que satisfagan las aspiraciones colectivas.

La innovación social es, por tanto, un proceso permanente que se nutre en diferentes etapas.

1.- Identificación de nuevas, necesidades sociales o bien identificar aquellas necesidades sociales que no han sido satisfechas o lo han sido de forma inadecuada.

2.- El desarrollo soluciones para cubrir de manera eficaz, eficiente y sostenible esas necesidades sociales.

3.- La evaluación de la efectividad de las nuevas soluciones.

4.- El escalamiento de los productos, servicios y modelos creados y su masificación a los demás ciudadanos y la comunidad, en donde se convierte en una gran herramienta de dialogo entre dicha comunidad.

Es importante mencionar que la innovación social tiene como plataforma base el uso de la tecnología y de las herramientas colaborativas que se generan de manera abierta en Internet. Uno de los caminos desarrollados en este tipo de proyectos de innovación social son las aplicaciones web que ayudan a la transparencia.

La innovación social empieza a encontrar eco en nuestro país, es menester que esta H. Asamblea la abrace, la impulse y apueste por el potencial de los ciudadanos nuevoleonenses.

Es por lo anterior que proponemos el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. - Se reforman por modificación los artículos 159 Bis y 159 Bis1 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 159 Bis.- Los contribuyentes que otorguen apoyos para la creación de obras literarias o artísticas de autores nuevoleonenses y los contribuyentes podrán acreditar, contra el impuesto sobre nóminas a su cargo, una cantidad equivalente al 85% del apoyo otorgado, conforme a lo siguiente:

Numerales 1al 5....

Los estímulos previstos en este artículo podrán aplicarse a los procesos de creación de obras artísticas originales...

Los apoyos serán inembargables...

Los apoyos otorgados en los términos previstos en este artículo no podrán acumularse ...

Corresponderá al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León ... El Consejo para la cultura y las Artes de Nuevo León deberá publicar ...

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con base en su disponibilidad presupuesta!, podrá ampliar las cantidades previstas en el presente artículo. Asimismo, en el ejercicio de sus facultades, deberá intervenir en la expedición de las reglas de operación que hace referencia el presente artículo y verificará el correcto uso del estímulo fiscal.

ARTÍCULO 159 BIS-I.- Los contribuyentes que otorguen apoyos para la innovación social impulsada por nuevoleonenses, podrán acreditar, contra el impuesto sobre nóminas a su cargo, una cantidad equivalente al 85% del apoyo otorgado. Para efectos del presente artículo, se entiende por innovación social a las nuevas ideas que generen productos, servicios y modelos que cumplen simultáneamente las necesidades sociales de manera más eficaz que otras alternativas y crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones teniendo como plataforma base el uso de la tecnología y de las herramientas colaborativas que se generan de manera abierta en Internet.

La acreditación del apoyo otorgado se hará conforme a lo siguiente1.- El monto total del estímulo fiscal a distribuir no excederá de \$15,000,000.00 anuales;

2.- Del monto total, un mínimo de \$ 2,000,000.00 será destinado de forma exclusiva a innovadores sociales menores de 30 años a la fecha en que lo soliciten a la Secretaría de Desarrollo Social.

3.- El monto anual del apoyo susceptible de aplicarse al estímulo fiscal por innovador o por proyecto no podrá exceder de los siguientes montos:
\$500,000.00 (Quinientos mil pesos) para el caso de innovaciones sociales implementadas con éxito que requieran mayor impulso \$1,000,000.00 (Un millón de pesos) tratándose de innovaciones sociales que estén en etapa de incubación.

4.- El monto acreditable será hasta del 100 % del impuesto sobre nóminas a cargo del contribuyente; y

5.- Los innovadores sociales podrán recibir hasta por dos ejercicios fiscales consecutivos apoyo derivado de este artículo y deberá pasar un ejercicio fiscal sin recibir para poder solicitarlo de nuevo.

Los estímulos previstos en este artículo podrán aplicarse a los procesos de innovación social en materia de generación de riqueza para sectores vulnerables, nuevos empleos que favorezcan el desarrollo sustentable, acceso a vivienda adecuada para el desarrollo humano; sistemas de salud humanizados, educación competitiva a nivel global, ciudad inteligente, preservación, cuidado y restauración de ecosistemas, promoción de una cultura de paz e inclusión, combate a todo tipo de violencia, combate a la contaminación de todo tipo, combate a las adicciones, impulso al deporte, impulso a las artes, así como toda innovación social que tenga como fin mejorar las condiciones de vida de la sociedad nuevoleonense.

Los apoyos serán inembargables, deberán proporcionarse en dinero y el contribuyente podrá optar por entregarlos directamente al creador o hacerlo a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, conforme a las reglas de operación que este organismo expida.

acumularse a otros estímulos que se otorguen en relación con diversas contribuciones federales, estatales o municipales.

Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León la autorización de los proyectos de innovación social, así como el establecimiento de los requisitos y trámites que deberán cumplir los interesados para hacerse merecedores del estímulo fiscal. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León deberá publicar en su página de Internet, dentro de los meses de julio y enero de cada año, un informe que contenga los montos erogados durante el primero y segundo semestres del ejercicio fiscal respectivo, según corresponda, así como las personas beneficiadas con el otorgamiento del estímulo fiscal y los proyectos de innovación social de dicho estímulo.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con base en su disponibilidad presupuesta, podrá ampliar las cantidades previstas en el presente Artículo, así mismo en el ejercicio de sus facultades deberá intervenir en la expedición de las reglas de operación que hace referencia el presente artículo y verificará el correcto uso del estímulo fiscal.

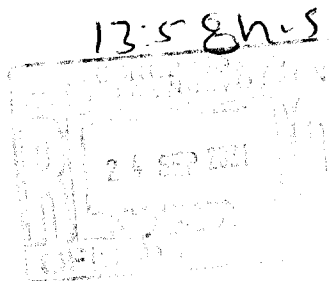
TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021


C. Felipe Enriquez Hernandez

010

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, Felipe Enríquez Hernández, [REDACTED]
[REDACTED] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN ARTICULO 159 BIS-2 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleonenses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.

- Envío del “acuerdo” o “decreto” al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

“los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

“Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja

por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

Es de señalar que la “baja por caducidad” de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHAVEZ y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:
Año:2018Expediente: 11984/LXXV

PROMOVENTE: DIP. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN ARTICULO 159 BIS-2 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESION: 02 de octubre del 2018

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Presupuesto

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ciudad de Monterrey y su periferia ha crecido de manera importante, la necesidad de servicios básicos y de infraestructura son cada día más evidentes por lo que se requiere mayor atención que propicie una mejor calidad de vida de todos los nuevoleonenses y para reducir los estragos de la falta de calidad en los servicios básicos, los ciudadanos buscan alternativas para que su vida cotidiana sea más satisfactoria, y un buen sector de la población aprovecha los avances de la tecnología para ser de uso cotidiano y encontrar en la cibernética ya

una herramienta útil para su subsistencia.

Nuevo León como ciudad moderna es una ciudad en constante desarrollo, con empuje a convertirse en una gran urbe ante la constante innovación tecnológica en el mundo.

En este sentido a través de la tecnológica el uso de los aparatos móviles conlleva a utilizarlo como de uso necesario para mantener comunicación en tiempo real, para la escuela para el trabajo, también a través de plataformas digitales.

Ahora bien, relativo a las plataformas digitales que el día de hoy operan y ofrecen una gama de servicios para los usuario que requieren servicios a través de sus aparatos móviles, o llamada telefónica como es el servicio de "vehículo compartido" también conocido por los términos en inglés "carpool" que consiste en compartir un automóvil con otras personas, en la cual es un sistema en línea que coordina a personas que pertenecen a una misma organización para compartir el auto.

El carpool en un viaje en vehículo compartido implica que los gastos del viaje serán divididos en partes iguales entre todos los ocupantes del vehículo (pasajeros y conductores). Regularmente el conductor no pretende ganar dinero, sino compartir entre varias personas los gastos de un viaje.

El beneficio más significativo de compartir coche es el de la reducción de gastos para cada uno de los usuarios. Un conductor que viaja solo en su auto puede ahorrar

hasta un 75% de su gasto.

Con esta práctica se pretende reducir la congestión de tránsito en las grandes ciudades como la de Monterrey y su periferia, así como facilitar los desplazamientos a personas que no dispongan de coche propio, y además de la escasez de estacionamiento o pensiones en la zona es un factor que incentiva la participación de este servicio. Actualmente en la entidad se ha dado la importancia a este tipo de servicio de carpool, cada día se ha aumentado el número de usuarios de este servicio, tan es así que empresas que ya operan este servicio.

A juicio de los promoventes de esta iniciativa consideramos viable la operación de este servicio sobre todo para las empresas que ofrecen este innovador servicio tecnológico, pues como lo señalamos anteriormente ha generado múltiples beneficios tanto para los usuarios como para aliviar ligeramente el intenso tráfico vehicular de todos los días, así como mejorar el ambiente evitando el uso de más vehículos, además del ahorro que conlleva utilizar este medio de transporte.

Es por ello que debemos apoyar estas empresas que operan el carpool en Nuevo León, a fin de que continúen y fortalezcan su servicio y lleguen a la región más compañías, de las que incluso algunas universidades ha impulsado esta práctica entre sus estudiantes.

Con la presente iniciativa los Diputados del Partido Acción Nacional seguiremos firmes con nuestro compromiso legislar con sentido social, proponiendo

medidas para que apoyen los intereses de la sociedad, es por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a consideración del pleno el siguiente proyecto:

DE C R E T O:

UNICO: Se reforma por adición de un artículo 159 Bis-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 159 Bis. 2- Las personas morales que acrediten ofrecer servicio transporte privado en la modalidad de vehículo compartido en el territorio de Nuevo León tendrán derecho a la reducción hasta del 50 o/o en el impuesto sobre nóminas a su cargo, en términos de las reglas de operación que se publiquen al respecto.

Los apoyos otorgados en los términos previstos en este artículo no podrán acumularse a otros estímulos que se otorguen en relación con diversas contribuciones federales, estatales o municipales.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con base en su disponibilidad presupuestal, podrá ampliar las cantidades previstas en el presente artículo. Asimismo en el ejercicio de sus facultades, verificará el correcto uso del estímulo fiscal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

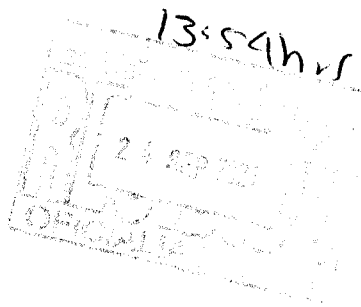
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO: La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado deberá en un plazo de treinta días naturales publicar en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación en que se aplicara la reducción del impuesto de sobre nóminas objeto de este decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021


C. Felipe Enríquez Hernández



DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, Felipe Enríquez Hernández, [REDACTED]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN ARTICULO 277 BIS 1 Y UN CAPITULO OCTAVO AL TITULO TERCERO DE LOS DERECHOS; ASI COMO UN ARTICULO 280 BIS AL CAPITULO UNICO, TITULO QUINTO DE LOS APROVECHAMIENTOS, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleonenses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.

Artículo 108. Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...

Artículo 67. El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.

Artículo 53. Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.

Artículo 54. Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.

Artículo 56. Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

“los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

“Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

Es de señalar que la “baja por caducidad” de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente 12637/LXXV, presentada en sesión el 30 de abril del 2019, turnada a las comisión de Presupuesto y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

Año: 2019, Expediente: 12637/LXXV,

PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

ASUNTO RELACIONADO A: INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN ARTICULO 277 BIS 1 Y UN CAPITULO OCTAVO AL TITULO TERCERO DE LOS DERECHOS; ASI COMO UN ARTICULO 280 BIS AL CAPITULO UNICO, TITULO QUINTO DE LOS APROVECHAMIENTOS, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 30 de abril del 2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): Presupuesto

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El crecimiento de la sociedad cada vez es mayor, y con ello las exigencias van en aumento. Actualmente hemos sido testigos de sucesos que han marcado trágicamente nuestra historia, con ello hago relevancia al sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017 que dejó 360 muertos siendo el desastre más mortífero de lo que va del siglo en México. Aunado a lo acontecido dos semanas antes de este temblor, el 7 de septiembre de 2017 se registró un terremoto de 8.1 grados de magnitud con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. Dejando un saldo letal de 102 víctimas mortales, 82 fueron en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. Siendo el movimiento telúrico más fuerte registrado en el país desde el terremoto de 1985.

A lo anterior es importante añadir el fuerte impacto generado por el cambio climático que, aunque hay quienes han minimizado sus consecuencias, los hechos nos han demostrado lo contrario.

Por lo cual, es importante generar conciencia que se traduzca en acciones concretas y contundentes, a fin de revertir los efectos negativos a nuestro planeta. Nuestra historia nos ha enseñado que ya no es tiempo de reaccionar ante los

desastres naturales o sucesos adversos generados por negligencia del ser humano, hoy es tiempo de crear una cultura de prevención entre cada uno de los habitantes de nuestro Estado.

Es necesario contar con la infraestructura y fondos suficientes para minimizar el impacto de sucesos adversos provocados por la naturaleza o por el propio ser humano.

Por tal motivo, consideramos que todo lo recaudado por motivo de pago de derechos y aprovechamientos atreves de lo estipulado en la Ley de Hacienda del Estado, se establezca que los servicios prestados en materia de Protección Civil, sean etiquetados y destinados única y exclusivamente para su debido funcionamiento, y con ello crear una corporación para otorgarle la capacidad de enfrentar los retos que día a día nos está lanzando la naturaleza, y el crecimiento desmedido de la sociedad.

Por todo lo antes expuesto, proponemos el siguiente:

Dada la naturaleza de esta iniciativa se dirige a que se encause y se cuente con la infraestructura técnica, equipamiento, capacitación, mantenimiento de equipo y vehículos de respuesta inmediata; y la operatividad en general de la corporación. Y con ello, estar en condiciones óptimas de otorgarle a la ciudadanía un servicio de respuesta inmediata.

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por adición un artículo 277 Bis 1 y un Capítulo Octavo al Título Tercero De los Derechos, así como un artículo 280 Bis al Capítulo Único, Título Quinto De lo\$ Aprovechamientos, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS CAPÍTULO OCTAVO

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO

277 Bis 1.- Todos los Derechos recaudados por concepto de la prestación de

desastres naturales o sucesos adversos generados por negligencia del ser humano, hoy es tiempo de crear una cultura de prevención entre cada uno de los habitantes de nuestro Estado.

Es necesario contar con la infraestructura y fondos suficientes para minimizar el impacto de sucesos adversos provocados por la naturaleza o por el propio ser humano.

Por tal motivo, consideramos que todo lo recaudado por motivo de pago de derechos y aprovechamientos a través de lo estipulado en la Ley de Hacienda del Estado, se establezca que los servicios prestados en materia de Protección Civil, sean etiquetados y destinados única y exclusivamente para su debido funcionamiento, y con ello crear una corporación para otorgarle la capacidad de enfrentar los retos que día a día nos está lanzando la naturaleza, y el crecimiento desmedido de la sociedad.

Por todo lo antes expuesto, proponemos el siguiente:

Dada la naturaleza de esta iniciativa se dirige a que se encause y se cuente con la infraestructura técnica, equipamiento, capacitación, mantenimiento de equipo y vehículos de respuesta inmediata; y la operatividad en general de la corporación. Y con ello, estar en condiciones óptimas de otorgarle a la ciudadanía un servicio de respuesta inmediata.

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma por adición un artículo 277 Bis 1 y un Capítulo Octavo al Título Tercero De los Derechos, así como un artículo 280 Bis al Capítulo Único, Título Quinto De los Aprovechamientos, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

TÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS CAPÍTULO OCTAVO

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO

277 Bis 1.- Todos los Derechos recaudados por concepto de la prestación de

servicios propios de la naturaleza de la Dirección de Protección Civil del Estado deberán ser etiquetados y destinados única y exclusivamente para el mantenimiento, equipamiento y operación de la misma.

Por los servicios prestados en la Dirección de Protección Civil del Estado, se causarán y pagarán los siguientes derechos:

I.- Por el otorgamiento de visto bueno de Protección Civil a establecimientos de su competencia de 20 a 80 cuotas.

II.- Por el otorgamiento de análisis de riesgo de Protección Civil a establecimientos y sectores privados de su competencia
..... de 10 a 35 cuotas

III.- Por impartición de cursos a establecimientos y sectores privados de su competencia.

De 10 a 50 cuotas

IV.- Por organización y evolución de simulacros a establecimientos y sectores privados de su competencia de 10 a 50 cuotas

TITULO QUINTO

De los Aprovechamientos

CAPITULO UNICO

280 Bis.- Todos los Aprovechamientos recaudados por concepto de la prestación de servicios propios de la naturaleza de la Dirección de Protección Civil del Estado deberán ser etiquetados y dirigidos única y exclusivamente para el mantenimiento, equipamiento y operación de la misma. Dichos servicios a que se refiere este artículo estarán establecidos en la Ley de la materia.

TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021

C. Felipe Enriquez Hernandez.

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [REDACTED]

[REDACTED] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: "INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN AL TITULO SEGUNDO DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, UN CAPÍTULO SÉPTIMO BIS, RELATIVO A IMPUESTOS AMBIENTALES, QUE CONSTA DE DOS SECCIONES DONDE SE INCLUYEN LOS ARTICULOS 158 BIS 1, 158 BIS 2, 158 BIS 3, 158 BIS 4, 158 BIS 5, 158 BIS 6, 158 BIS 7, 158 BIS 8, RELATIVOS A IMPUESTOS AMBIENTALES".

Lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleonenses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del "acuerdo" o "decreto" al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar

pasarlo a otra comisión.

Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

“los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

“Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

Es de señalar que la “baja por caducidad” de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una comisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo del PAN, identificándose bajo el expediente 13573/LXXV, presentada en sesión el 24 de Junio del 2020, turnada a las comisión de presupuesto y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad.

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del Promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

PROMOVENTE: C. DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES. COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA Y EL C. HERNÁN SALINAS WOLBERG

A UNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, UN CAPÍTULO SÉPTIMO BIS, RELATIVO A IMPUESTOS AMBIENTALES, QUE CONSTA DE DOS SECCIONES DONDE SE INCLUYEN LOS ARTÍCULOS 158 BIS 1, 158 BIS 2, 158 BIS 3, 158 BIS 4, 158 BIS 5, 158 BIS 6, 158 BIS 7, 158 BIS 8, RELATIVOS A IMPUESTOS AMBIENTALES.

INICIADO EN SESIÓN: 24 de junio del 2020

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Presupuesto

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contaminación atmosférica tiene efectos perjudiciales en dos aspectos fundamentales para la vida del ser humano y de otros organismos vivos; y en la salud de la persona y los seres vivos, por lo que consideramos la iniciativa de mérito en materia tributaria reviste especial importancia. Más aún que obedece a una naturaleza no recaudatoria, sino extrafiscal.

Es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las contribuciones pueden servir como instrumentos para articular políticas sociales y económicas que el Estado tenga interés de impulsar, que en el caso particular, atañe a desincentivar la actividad contaminante, y a impulsar la inversión en nuevas tecnologías, procesos, investigación y desarrollo para mitigar la actividad contaminante e incorporar el uso de energías renovables y energías limpias en los procesos productivos y en la matriz energética.

Adicionalmente para el ser humano, la contaminación tiene diversas implicaciones económicas, que, de no ser atendidas, pueden extender la brecha de desigualdad entre las personas, como muestra el estudio Calidad de Combustibles publicado en 2006 entonces por la SEMARNAT y PEMEX Refinación que precisa:

Cuadro 11. Beneficios en la salud (casos evitados y ellas pen: IlclosJ por la Introducccl6n de combUstibles ct. bajo IIZIINI y nuevas Menologlas v. hleulares. 2008-2830

2006	0	0	0	0
2007	233	862	36,990	476,100
2008	253	928	39,120	508,400
2009	349	1,257	52,550	689,300
2010	636	2,266	93,090	1,232,000
2011	736	2,606	104,900	1,400,000
2012	864	3,040	119,900	1,612,000
2013	1,001	3,494	135,100	1,829,000
2014	1,118	3,860	146,700	1,998,000
2015	1,265	4,319	161,300	2,209,000
2016	1,442	4,867	178,700	2,459,000
2017	1,640	5,462	197,400	2,727,000

Fuente: "Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto integral de calidad de combustibles. Reducción de azufre en gasolinas y diésel, Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y PEMEX Refinación, México, D.F., 2006.

A manera de sustentar lo anterior, se advierte que la Organización Mundial de la Salud en su análisis sobre la calidad del aire en distintas ciudades de la República; indicó en su momento que Monterrey es la ciudad más contaminada con 86 PM10 (Partículas Menores a 10 Micrómetros) y 36 PM2.5 (Partículas Finas Menores a 2.5 Micrómetros). Por ello se calcula que la contaminación atmosférica cuesta al gobierno y a los particulares entre cuatro y ocho mil millones de dólares al año en Nuevo León, considerando los costos de salud, baja de productividad y ausentismo al año.

En la misma línea, se estima que del total de la contaminación generada de PM2.5 en Nuevo León entre 37.38% y el 53% es a causa de emisiones vehiculares, por lo que la salud de los ciudadanos neoleoneses se encuentra directamente expuesta por las emisiones contaminantes de los vehículos.

Por otro lado, el 29 de abril se resuelve por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el "Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", en adelante "Acuerdo CENACE", mismo que es publicado en fecha 1 de mayo de 2020 en el "BUZÓN DE NOTIFICACIONES" del "Sistema de Información del Mercado. Área Pública"; en el que, se determina la suspensión de pruebas preoperativas de las Centrales Eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial; mandata las operaciones de Unidades de Central Eléctrica (Must Run) que son a base de combustóleo y otros agentes contaminantes, y modifica materialmente el "Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red".

Materialmente, el "Acuerdo CENACE" elimina el proceso de pruebas para incorporar energías renovables en la matriz energética, bajo premisas falsas como la baja en la demanda de energía. Cabe destacar que a la fecha de elaboración del

presente, el CENACE se ha mantenido la prohibición a las energías renovables, pero se instruido levantar la suspensión de pruebas de generación de energía renovable tras la obtención de suspensiones en favor de múltiples empresas en sus juicios de amparo.

En el "Acuerdo CENACE" en su Considerando Noveno, refiere una serie de confabulaciones fuera de sustento o razonamiento jurídico lógico, al insistir el CENACE que a la Secretaría de Energía le corresponde establecer la política energética del país así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, promover "que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación", "atendiendo entre otros, al criterio de soberanía y la seguridad energéticas". En ninguna parte del citado Considerando Noveno explica que la participación de los particulares en las actividades del sector energético represente por sí algo que atente en contra del criterio de soberanía energética ni un riesgo al suministro de energía en forma alguna. Asimismo, no existe una definición legal u orientadora que fundamente legalmente lo que signifique ni se deba entender por ese criterio.

La Secretaría de Energía confirma y profundiza el alcance del "Acuerdo CENACE" con el "ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional." -en adelante la "Política SENER", toda vez que guardan una amplia y profunda relación. Bajo nuestra óptica, la "Política SENER" brinda soporte al "Acuerdo CENACE", el cual la misma Secretaría de Energía reconoce ordenó al CENACE para brindar "certeza en la continuidad y seguridad en el sistema eléctrico durante esta contingencia"¹.

De forma adicional, la "Política SENER" busca legitimar e impulsar la prohibición y restricción de las pruebas e incorporación de las energías renovables como las fotovoltaicas y eólicas en el país.

La Secretaría de Energía se justifica con un comunicado de fecha 16 de mayo de 2020 con el pretexto de la emergencia sanitaria en el marco del COVID-19, argumentando "hoy vivimos las consecuencias de la pandemia y es de notar que *g* ***redujo de manera drástica la demanda eléctrica en el sector industrial y comercial. con lo cual aumentó el preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda. lo que compromete la confiabilidad v continuidad del suministro eléctrico,*** especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia. Por eso, desde la Secretaría de Energía, estamos trabajando en la definición oportuna de medidas correctivas."²

¹ Ver https://twitter.com/SENER_mex/status/1257876435898777600 //Publicación en Twitter desde la cuenta oficial de la Secretaría de Energía "Durante entrevista telefónica con @alebrijesl, la secretaria @rocionahle destacó que se instruyó al @CenaceMexico para que diera certeza en la continuidad y seguridad en el sistema eléctrico durante esta contingencia." Publicación de fecha 5 de mayo de 2020.

² Ver <https://www.gob.mx/sener/articulos/el-gobierno-de-mexico-fortalece-el-sistema-electrico-nacional>

Contrario a lo que comenta SENER y CENACE la demanda eléctrica durante la pandemia no es la mas baja, por lo que no se generan problemas técnicos y no se justifica detener las plantas de los privados.

Demande mensual desde OleZ018.
OleY Enoro del 2018y 2019 con
demando mas baja qua Mary Ahr
porCOVID

MES	DEMANDA GWh
ENE	
FEB	801.66
MAR	819.05
ABR	852.46
MAY	929.60
JUN	965.99
JUL	974.34
AGO	999.99
SEP	990.57
OCT	867.99
NOV	800.21
DIC	
ENE	
FEB	793.63
MAR	833.99
ABR	

Demande mensual desde Dic; 2018.
20 dias con m.....demando. Nmauno
ho \$do duronto lo p l Indomil
Azul+ domlnao, Unio +fe&ll los

FECHA	GWh
25/12/2018	
25/12/2019	
24/12/2018	
23/12/2018	
31/12/2018	
24/12/2019	
02/02/2020	
29/12/2019	
31/12/2019	
03/02/2020	
30/12/2018	
26/12/2019	887

Fuente: Fuente: Portal de ENER de la industria, <http://www.enr.com.mx/energetica/>

SENER en ninguno de sus documentos ni estudios demuestra que la reducción de la demanda comprometa la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico. Estas son cuestiones diferentes entre sí, en caso de haber menor demanda se reduce la tensión de las líneas de transmisión y en su caso, se adecua el volumen de generación; pero eso no debe implicar y de ninguna forma lógica lo hace, excluir el proceso de incorporación de energías renovables.

La Secretaría de Energía se escuda de forma injustificada en el contexto de emergencia sanitaria para destruir a las energías renovables con el "Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional" (Política SENER). Con ello, se vulnera el principio de progresividad y no retroactividad en materia de derechos humanos, especialmente en lo que concierne el derecho a un medio ambiente sano, el uso de fuentes de energías no contaminantes, y la transición energética; que permitan contar con una atmósfera limpia, lo que se traduce en una mejor calidad de aire y menores riesgos a la salud.

La SENER obliga a los usuarios finales a tomar electricidad que sea suministrada por centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad que generen energía con combustibles contaminantes a precios mayores que los generadores privados, arriesgando reiteradamente nuestra salud en el proceso.

La "Política SENER" desvirtúa la viabilidad de las energías limpias en la matriz energética del país, impactando negativamente la salud de los mexicanos y los compromisos del país en materia de medio ambiente. Adicionalmente, trae como efecto colateral el aumento del precio de la generación de energía al usar combustóleo y otras fuentes contaminantes y suspende por un plazo indefinido la entrada y pruebas de operación de plantas de energías renovables.

Es inconcebible que en el país se continúen utilizando fuentes de energía contaminantes, y excluyendo la participación de fuentes renovables y no contaminantes como la eólica y fotovoltaica, en perjuicio de la población; prolongando el régimen de contaminación que existe en el país.

Como es sabido, los tratados internacionales de los que México es parte constituyen ley suprema y obligan, en la República, por sobre diversas disposiciones legales, incluyendo leyes generales. Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En calidad de gobernados, la violación de los Tratados constituye una afectación indebida a la esfera de derechos a un medio ambiente sano, al adoptarse medidas que tienen por objeto y efecto ir en sentido contrario a los compromisos adoptados por México en materia de cuidado del medio ambiente. En efecto, el Acuerdo es violatorio del Acuerdo de París, adoptado por México en abril de 2016 y ratificado el 21 de septiembre del mismo año, publicado en el DOF el 4 de noviembre de 2016.

El Acuerdo de París reconoce que el cambio climático es un problema de toda la humanidad, y que las Partes firmantes deberán respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, haciéndose el compromiso de reducir las emisiones de gases efecto invernadero, y alcanzar un desarrollo ambiental sustentable.

Lo anterior ha sido reconocido por nuestros tribunales. En ese sentido, la sentencia AR 610/2019 hace referencia al artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático (que reflejó en leyes internas los compromisos asumidos por México en el Acuerdo de París), en el que se establece el compromiso de México para reducir de manera no condicionada en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y un cincuenta y uno por ciento sus emisiones de carbono negro al año 2020.

Es menester considerar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido la Recomendación General 32/2018, relativa a violaciones humanas a la

salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano ocasionados por la contaminación atmosférica urbana.

Dicha recomendación fue efectuada en virtud de una queja en relación a la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes criterio de las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, así como sobre la inadecuada distribución en todo el territorio nacional de gasolina y diésel con las calidades satisfactorias, para el adecuado funcionamiento en vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera, lo que considera la CNDH son circunstancias que influyen directamente en el disfrute de un medio ambiente saludable y en la salud de las personas. Lo que claramente es un paralelo en el fondo y en la forma, a lo que está avalando la SENER, con la distinción que la fuente de energía final es energía eléctrica en este caso.

A su vez, es claro que la entrada en operación de plantas llamadas "must run", o de reserva, entre las que se encuentran las de combustóleo, está vinculada con una estrategia para deshacerse del combustóleo generado en las refinerías, más que a atender una emergencia sanitaria ni garantizar una política de soberanía energética. Es claro, a nuestro juicio lógico que actualmente, si se estaban procesando aproximadamente 400 mil barriles diarios en las refinerías y generando un 26% por ciento de combustóleo y ahora se pretende incrementar la producción se generarán más barriles de un producto que no se compra actualmente en el mundo, pero que ahora lo podrían quemarán las centrales de CFE como si fuera un incinerador de basura; con todas las consecuencias a la salud que ello conlleva.

En este mismo orden de ideas, nos es imperativo señalar que el principio de progresividad en materia de derechos humanos que ha sido reconocido expresamente por la SCJN y lo identifica como la protección efectiva y real de los derechos humanos atendiendo a la gradualidad y progresividad, lo que consiste en reconocer que la efectividad de los derechos humanos no es inmediata, sino que requiere de construcción de objetivos medibles a plazos, y que *el disfrute de los derechos humanos siempre debe mejorar con el paso del tiempo*, lo que en la recomendación atañe a la contaminación atmosférica urbana. No es potestativo para la Autoridad demorar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos.

En ese sentido, es obligación de las Autoridades ampliar el alcance y protección de los derechos humanos, en el sentido de que hay exigencias positivas y negativas impuestas para todas las autoridades. El desarrollo gradual de las disposiciones que crean o aplican normas, lo anterior como un *"deber positivo de progresar"*, es una obligación para la Autoridad.

Lo anterior, al tenor del siguiente criterio:

"Época: Décima Época

Registro: 2015305

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 47, Octubre de 2017, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a.IJ. 8512017 (10a.)

Página: 189

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas. ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos: y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar)."

(ÉNFASIS AÑADIDO).

El criterio en boga, además de reforzar el razonamiento relativo al principio de progresividad previamente vertido, adiciona obligaciones en sentido negativo, prohibiendo la regresividad sobre los derechos, impidiendo que se restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela que ya se reconocía de derechos humanos.

La propia CNDH identifica con meridiana claridad en su recomendación que *"[e]xisten datos a nivel nacional en relación a la calidad del aire en diversos centros de población del país, mayormente en las zonas metropolitanas donde la contaminación es más elevada, razón por la cual se tienen contempladas zonas críticas: a) Zona Metropolitana del Valle de México; b) Zona Metropolitana de Guadalajara; e) Zona Metropolitana de Monterrey."*³

Prosigue la CNDH en su numeral 32⁴, "[d]ebido a los elevados niveles de contaminación existen zonas que han recibido diferente tratamiento en relación al resto del país, esto con la finalidad de mitigar la contaminación, como, por ejemplo, distribuir gasolinas sin etanol en las Zona CDMX y alrededores, Guadalajara y Monterrey."⁵

Adicionalmente, recalca la CNDH "[s]egún afirma el estudio Calidad de Combustibles publicado en conjunto por SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología y PEMEX Refinación "varias zonas urbanas de nuestro país se encuentran en esta situación en hasta 80% de los días del año...", se refiere a los niveles por encima de las regulaciones permitidas a nivel nacional, en relación al PM y del 03, esto debido a que el azufre en las gasolinas ocasiona la emisión de compuestos contaminantes, razón por la que se requirieron combustibles fósiles que cumplan requerimientos más estrictos."⁶

El propio estudio indicado precisa que las normas de calidad de aire son frecuentemente excedidas por las zonas urbanas, poniendo como ejemplo que en 2006 la ZMM estuvo 14 días por arriba del límite de 03 y 64 días encima de los límites de PM. Cabe destacar que solamente se tiene evidencia que los índices de contaminación han empeorado, desde entonces, y seguirán empeorando si se permiten estas acciones de SENER.

El derecho humano al medio ambiente sano se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, en donde se establece lo siguiente:

³ Recomendación General 32/2018 CNDH, p. 12

⁴ Idem, p. 12

⁵ Idem, p. 15. Refiere a Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, p. 4

⁶ Idem, p. 16

"Artículo 4o.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.,.,,

A pesar de que este derecho se encuentre consagrado en la Carta Magna y que el Estado, la Federación, los estados y los municipios deben velar por el cumplimiento de este derecho, no se ha logrado garantizar para todos los grupos poblacionales, muestra de ello es la situación de contaminación alarmante que se vive en Nuevo León y en el país.

El Estado mexicano y la SENER tienen obligaciones particulares en la materia, por lo que consideramos que resultan aplicables en relación con este rubro la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, la Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Transición Energética, entre otras.

Legalmente, el cambio climático es una realidad aceptada por el Estado mexicano, y las propias disposiciones en la materia nos mandatan a tomar acciones respecto a los efectos del cambio climático y de los combustibles fósiles, considerando el Principio de Precaución ante un riesgo inminente, como lo es el cambio climático y sus consecuencias en la salud humana por lo que debemos transitar hacia una economía baja en emisiones de carbono y que cuide la salud sobre todas las cosas.

De conformidad con el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en relación con las obligaciones de protección y garantía, los Estados se encuentran constreñidos a llevar a cabo medidas específicas para el cumplimiento de sus compromisos contraídos a nivel internacional en relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales⁸, los cuales son objeto de esta queja, en especial en relación a medidas económicas y técnicas, las cuales son precisamente las requeridas para mitigar y controlar la contaminación atmosférica urbana.

Dicho artículo del señala la obligación de implementar las medidas técnicas y económicas de manera progresiva, para propiciar un cumplimiento paulatino a lo largo del periodo de tiempo, con la finalidad y objetivo principal de lograr la plena efectividad de los derechos, cuya progresividad representa en el mismo sentido, que su cumplimiento no sea tan oneroso. Esta misma obligación se reconoció igualmente en el artículo desde el primer artículo constitucional en México.

⁷ Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos

⁸ Idem, p.90

El Protocolo de San Salvador, en sus primeros dos artículos establece la obligación de los Estados para adoptar tantas medidas económicas y técnicas que resulten necesarias en los ordenamientos jurídicos nacionales para cumplir progresivamente y con la máxima disponibilidad de recursos, la plena efectividad de los derechos, incluyendo entre ellos el derecho a un medio ambiente sano y la protección de la salud.⁹

*Ahora, es claro que el Estado tiene obligaciones consistentes en el deber de prevención. "el cual estriba en toda medida de carácter jurídico. administrativo. político incluso cultural; las estrategias de prevención deben ser integrales, es decir. deben prevenir los factores de riesgo, aun viniendo de entes particulares, ya que. de lo contrario se estaría frente a la falta de debida diligencia para prevenir violaciones."*¹⁰

Prosiguiendo con el sentido y contenido de la Recomendación General 32/2018, se retoman las consideraciones relativas a la protección de la salud, es claro que el derecho de todas las personas a gozar de un nivel de vida adecuado existe e incluye *"respirar aire libre de agentes contaminantes, el cual encuentra su estándar en los artículos 1º y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Convención Sobre los Derechos del Niño.,"*¹

Por otro lado, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales este dispone que: *"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia"*, lo que engloba el contar con aire limpio continuamente y acorde al principio de progresividad previamente descrito en este curso.

De forma concordante, en el sistema interamericano se contempla "indirectamente el derecho a un nivel de vida adecuado en los artículos 4 y 1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos a través del derecho a la vida e integridad personal, según interpretación de la CIDH en su Opinión Consultiva 23/17 sobre Medio Ambiente."¹² En esa tesitura, reconoce que está relacionado al goce de la dignidad humana: *"(...) Entre las condiciones necesarias para una vida digna, la Corte se ha referido al acceso y calidad del agua, alimentación y salud, cuyo contenido ya ha sido definido en la jurisprudencia de esta Corte, indicando que estas condiciones impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna(...) la*

⁹ Idem, p.91

¹⁰ Idem, p. 93

¹¹ Idem, p. 104

¹² Idem, p. 104

*protección del medio ambiente como una condición para la vida digna" siendo indispensable para la garantía del disfrute de un nivel de vida adecuado."*¹³

Es claro, que en el marco de la vida urbana y dinámica que impera en la Zona Metropolitana de Monterrey y en el país tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado, garantizando la dignidad humana y protección de los derechos humanos. En este gran marco, se vislumbra la contaminación atmosférica urbana, puesto que sus efectos adversos propician condiciones que no satisfacen la salud pública y el bienestar de la población en general, *'ya que la contaminación aunado a un transporte público urbano inadecuado, ineficiente, no sustentable o generador de emisiones altamente contaminantes, influyen directamente en la vida y salud alterando factores fisiológicos, físicos y biológicos de las personas.'*¹⁴

Con independencia del bienestar individual al que se tiene derecho, esta condición también se encuentra de una gama de bienestar colectivo, que obedece a la simple condición de vivir en comunidad y que los derechos de cada uno son compartidos por todos los que se encuentren en el mismo supuesto.

Consideramos necesario discernir que hay daños ambientales continuados y que se realizan a diario, como los originados por la contaminación atmosférica urbana que persiste en las zonas más pobladas en el país, "transgrediéndose de esta forma una de las obligaciones generales en materia de derechos humanos a cargo de las autoridades, que es proteger a la población, al no inspeccionar y vigilar con la debida diligencia las distintas actividades de los sectores involucrados: salud, ambiental, normalización, energéticos, transporte y movilidad que generan y propician los efectos adversos de la contaminación."¹⁵ En ese tenor se ha pronunciado la CNDH en su Recomendación 48/2015 indicando "mientras persista la presencia indeterminada e indefinida de contaminantes en el medio ambiente se actualiza como violación al derecho humano respectivo."¹⁶

El pasado 3 de septiembre de 2019, el Instituto Nacional de Salud Pública publicó en su sitio oficial el estudio *"Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities"*¹⁷, publicado originalmente por *The New England Journal of Medicine*, en el que participaron investigadores de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde entre otras cosas se refuerza lo aquí expuesto, ya que queda evidenciada la circunstancia de que la exposición a

¹³ Idem

¹⁴ Idem, p. 105

¹⁵ Idem p. 110

¹⁶ Idem

¹⁷ Traducido al español como "Contaminación atmosférica particulada ambiental y mortalidad diaria en 652 ciudades".

corto plazo a material¹⁸ particulado (PM) en zonas urbanas se asocia a un incremento en la mortalidad.^{1a}

Y, en particular para el caso de la ZMM, queda asentado que es la más contaminada por Partículas Menores de 10 micras (PM10) en toda la América continental, registrando valores de 76 microgramos por metro cúbico. Por lo aquí expuesto en numerales anteriores y dado lo sustentado por esta CNDH, es claro que en la ZMM se respira cerca del doble de los valores aceptados en la normativa mexicana y casi siete veces más lo indicado por la OMS.

Los investigadores mexicanos involucrados señalan que *"cuando se analizó la curva dosis-respuesta de la concentración de PM10 y PM2.5 y la mortalidad diaria, se observó un aumento constante sin evidencia de umbral, lo que indica que incluso a exposiciones por debajo de los valores guía que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), para proteger la salud de la población, se mostró un incremento en la mortalidad por todas las causas no externas."*¹⁹

En su Recomendación 48/2015, la CNDH ha sostenido que las violaciones a las normas relativas a la prevención y control de la contaminación atmosférica no sólo representan irregularidades administrativas para la entidad responsable, *"Sino que implican una omisión por parte de las autoridades ambientales de mantener la calidad del aire adecuada para el equilibrio ecológico y la salud pública, por lo tanto, una violación al derecho a un medio ambiente sano."*²⁰

Como hemos sostenido con el estudio avalado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el incumplimiento de la SENER, tiene impactos directos e indirectos en el aumento de los niveles de contaminantes 5 que provocan graves daños y ponen en riesgo a la salud de las personas que habitan las zonas urbanas, particularmente a una zona tan contaminada como lo es la de Monterrey, la más contaminada de América. Esto pone a Monterrey en un plano de especial, urgente y obvia diferencia en su condición vis a vis a las otras zonas metropolitanas del país, la gravedad de la situación de Monterrey no amerita que la SENER y otras autoridades se sigan escondiendo en el mar de regulaciones o justificaciones de ideología política. Esto requiere acciones inmediatas.

A la luz de la Agenda 2030 de la ONU, nos queda claro que el Objetivo 11 mandata *"Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"* por lo que se debe cumplir con el numeral *"11.6 reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo"*. El Estado mexicano es parte de esta agenda, y es parte de nuestras obligaciones internacionales y constitucionales.

¹⁸ Disponible en: <https://www.insp.mx/lavisos/5061-ciudades-asociacion-contaminacion-aire.html>

¹⁹ Idem

²⁰ CNDH. "Recomendación General32/2018", p. 117. 2018.

En repetidas ocasiones, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado respecto al derecho fundamental a un medio ambiente sano previsto en el artículo 4 constitucional, en el que las autoridades del estado tienen la obligación de garantizar su efectividad mediante normas y acciones específicas, aunque éstas impliquen la restricción de actividades particulares de la población como el uso de vehículos automotores de combustión interna, para el bien colectivo e interés social, puesto que la distribución de gasolinas es de orden público en el territorio nacional, resulta indispensable buscar alternativas sostenibles sobre el transporte privado y público de pasajeros con cero emisiones en todo el país, no sólo en zonas focalizadas.²¹ Lo anterior, a la luz de la tesis *"Derechos a la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Acciones que debe realizar el estado mexicano para su salvaguarda y para ajustarse a los estándares internacionales, en materia de medidas de restricción a la circulación de vehículos por la aparición de contingencias ambientales"*, entre otras.

Dentro de ese contexto, el estado mexicano adoptó el Acuerdo de París, instrumento internacional que establece las bases para una sociedad sustentable y baja en emisiones de carbono, el cual entró en vigor el pasado 4 de noviembre de 2015. *"El Acuerdo de París reconoce en su preámbulo que las Partes. al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. deben respetar. promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos. el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad, las personas en situaciones de vulnerabilidad, y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional"*²². La misma CNDH ha instado al cumplimiento de los compromisos relacionados con la protección de la vida, la salud, la integridad personal, la alimentación, un medio ambiente sano, la vivienda y el acceso a la información y la participación, incluyendo a *"las a todas las autoridades para que. en el ámbito de sus atribuciones. contribuyan de manera coordinada a atender los compromisos bajo el Acuerdo de París. lo cual a su vez coadyuvará a la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 13 relativo a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos."*²³

Sin lugar a duda, el mismo Acuerdo de París en materia de cambio climático impone una serie de obligaciones a México, y precisamente de estos acuerdos deriva la propia Ley de Transición Energética, acampanada de reformas en las normas de Cambio Climático. *Inclusive. el propio artículo tercero transitorio de la Ley de Transición Energética expresamente mandada "La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la*

²¹ Idem

²² Ver https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Comunicados/2016/Com_2016_284.pdf

²³ Idem

generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024." Esta meta es obligatoria y mínima, por lo que debe hacerse todo lo posible para al menos, incorporar el uso de energías limpias en la matriz energética en esos volúmenes.

Precisamente, con relación al cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por México, con la publicación de la "Política SENER" se dificultaría enormemente alcanzar los compromisos ratificados por el Gobierno de México en el Acuerdo de París, dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), que establece un 35% de generación limpia en 2024, lo que provocaría dos graves afectaciones: la primera, se recrudecerían los efectos del cambio climático en el territorio nacional (sequías, inundaciones, afectación a la biodiversidad ..), provocando costos económicos indirectos que se calculan de entre un 0.2% y 2% del Producto Interno Bruto²⁴ y la segunda afectación sería a toda la cadena de valor en torno a la industria renovable: trabajadores, fabricantes de componente, constructores civiles. Ambas afectaciones supondrían finalmente un fuerte impacto al desarrollo de la economía mexicana.

En sintonía con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "1a especial configuración del derecho ambiental exige un cambio en la lógica jurídica caracterizado, principalmente, por la flexibilización de diversas instituciones del derecho procesal. La justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente no puede desarrollarse a partir de los modelos "Clásicos" o "tradicionales" de impartición de justicia, pues en la mayoría de las ocasiones éstos resultan insuficientes y poco idóneos para tal fin."²⁵

Bajo el alcance del principio de precaución, el Estado mexicano ha determinado por medio de diversas leyes, como lo es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Cambio Climático, se han expedido diversas Normas Oficiales Mexicanas como se ha mostrado en este curso, ha creado la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad que reconocen el valor de los servicios ambientales²⁶ y protegen el

²⁴ Nordhouse

²⁵ Amparo en Revisión 307/2016 Primera Sala SCJN

²⁶ "Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta "biblioteca genética" de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y productos industriales." recuperado de: <http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam>

medio ambiente, incluyendo especialmente la atmósfera; e instaurado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que opera y da mantenimiento al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire.

Este mismo Instituto destaca el "Contexto Internacional en materia de Cambio Climático"²⁷ lo siguiente:

"México firma la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ese mismo año es aprobada unánimemente por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. La Convención fue ratificada ante la ONU en 1993 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, estableciendo un marco de acción cuyo objetivo último es "Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel deberfa lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible."

Las Partes firmantes de la Convención están sujetas a los compromisos generales de responder al cambio climático y por ello, han acordado, formular, aplicar y actualizar periódicamente programas nacionales de cambio climático; cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos al cambio climático; compilar inventarios nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes periódicos sobre las medidas que están adoptando para aplicar la CMNUCC.

*Como parte de los acuerdo (sic) de la CMNUCC se estableció celebrar anualmente la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), reunión en la cual se llevan a cabo negociaciones para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la CMNUCC. La primera COP se llevó a cabo en 1995 en Berlín, Alemania y desde entonces México participa activa y regularmente."*²⁸

Inclusive, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que la atmósfera es "esencial para el mantenimiento de la vida"²⁹ y sostiene sobre la misma respecto al volumen "de los contaminantes emitidos, tanto local como regionalmente a la atmósfera, determinan en buena medida la calidad del aire en una zona particular. Las características climáticas y geográficas también influyen en las condiciones del aire a las que están expuestas las poblaciones."³⁰

²⁷ Recuperado de: <https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057>

²⁸ Ibid

²⁹ Recuperado de: <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/atmosfera>

³⁰ Ibid

En sintonía con el principio de no regresión el Estado mexicano ha entablado una línea protección tendiente a conservar la atmósfera y su ecosistema como parte del medio ambiente.

Además, contemplando el principio de participación ciudadana adminiculado con la iniciativa pública, si bien el gobernado tiene un derecho y deber correlativo de proteger el medio ambiente, lo cierto es que el obligado principal a acatar la normativa ambiental es el Estado. Lo que se traduce al hecho material y jurídico pertinente a las autoridades, y son estas quienes deben adoptar un rol proactivo y de máxima diligencia en la protección y conservación del medio ambiente. En este tenor, basta con demostrar que la autoridad incumplió con su deber de garante para considerar que se vulnera su derecho humano al medio ambiente y conceder la protección constitucional; como es en el caso particular que nos atañe. Es obligación del legislativo ser proactivo en estos asuntos.

Bajo nuestra óptica, se debe traer a consideración la Controversia Constitucional 56/2017, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los congresos locales son competentes para imponer este tipo de gravámenes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona al Título Segundo el Capítulo Séptimo Bis, Impuestos Ambientales, que consta de dos secciones donde se incluyen los artículos siguientes: 153 bis, 153 bis 1, 153 bis 2, 153 bis 3, 153 bis 4, 153 bis 5, 153 bis 6, 153 bis 7, y 153 bis 8 a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

CAPITULO SÉPTIMO BIS

Impuestos Ambientales

De la Emisión de Gases a la Atmósfera

Art. 153 bis.- El objetivo y finalidad de estas contribuciones es que la Hacienda Pública del Estado cuente con recursos que le permitan financiar las políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, al fomento de la sustentabilidad de las actividades económicas, industriales y productivas en el estado, así como para cumplir con las obligaciones de protección a la salud, al ambiente, y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Asimismo, estas contribuciones tienen como finalidad que los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de causación, aporten a la hacienda pública en proporción a la afectación a los componentes del medio ambiente y los efectos negativos generados por el sustrato económico que llevan a cabo, cuando éste produzca emisiones de carbono y otros gases a la atmósfera.

Artículo 153 bis 1.- Para los efectos de este Capítulo serán aplicables de manera supletoria la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, la Ley de Cambio Climático del Estado de Nuevo León y demás disposiciones estatales vigentes en materia de derecho al medio ambiente sano, que no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal, y los principios de progresividad e in dubio pro natura.

Para determinar la base gravable, las autoridades fiscales podrán considerar:

- I. Los libros y registros sean cual fuera su denominación, que los sujetos obligados al pago del impuesto deban llevar conforme a las disposiciones legales, sean de carácter fiscal, mercantil o para dar cumplimiento a las normas en materia de ecología y medio ambiente, y;
- II. Cuando no sea posible determinar la base gravable en los términos de la fracción anterior, las autoridades fiscales podrán estimar la cantidad conforme a la información que se obtenga de otras autoridades, terceros, estudios científicos o tecnológicos, considerando el tipo de actividades realizadas por el contribuyente y la producción o venta del periodo en el que se causó la contribución.

SECCIÓN 1

De la Emisión de Gases a la Atmósfera

Del Objeto

Artículo 153 bis 2.- Son objeto de esta contribución las emisiones a la atmósfera de las sustancias generadas por los procesos productivos que se desarrollen en el estado y que afecten el territorio del mismo.

Para los efectos de este artículo, se considera emisión a la atmósfera, la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluoro-carbonos, y hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental.

De los Sujetos

Artículo 153 bis 3.- Son sujetos y están obligados al pago de esta contribución, las personas físicas, las personas morales, unidades económicas residentes en el estado o cualquier sujeto de derecho en el estado con independencia de su denominación, así como los residentes fuera de Nuevo León que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas dentro del estado.

También comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federación, el Estado; los Municipios, los organismos descentralizados federales, estatales, y municipales; las empresas productivas del Estado, las empresas de participación mayoritaria de carácter federal y estatal, las empresas con participación federal o estatal, las empresas de participación municipal, los fideicomisos, los fideicomisos constituidos por cualquiera de los poderes de cualquier orden de gobierno, así como las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, o de cualquier entidad federativa.

De la Base

Artículo 153 bis 4.- Es base de esta contribución la masa de emisiones contaminantes gravadas que se realicen desde las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.

Para la determinación de la base gravable, el contribuyente la realizará mediante medición o estimación directa de las emisiones que genere, y en su caso, se tomará como referencia el último Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como de los reportes de emisiones estatal.

Para la determinación de las toneladas emitidas, el contribuyente realizará la conversión de los gases establecidos en el artículo 153 bis 2 de esta ley en bióxido de carbono (CO₂), multiplicando la tonelada del tipo de gas emitido por el factor relacionado conforme a la tabla siguiente:

Gases de Efecto Invernadero	Composición Molecular	Equivalencia
Bióxido de Carbono	CO ₂	1
Metano	CH ₄	23
Óxido nítrico	N ₂ O	296
Hidrofluoro-carbonos	HFC-23	12,000
	HFC-125	3,400
	HFC-134 ⁸	1,300
	HFC-152 ⁸	120
	HFC-227ea	3,500
	HFC-236fa	9,400
	HFC-4310mee	1,500
Perfluoro-carbonos	CF ₄	5,700
	C ₂ F ₆	11,900
	C ₄ F ₁₀	8,600
	C ₆ F ₁₄	9,000
Hexafluoruro de azufre	SF ₆	22,200

De la Cuota

Artículo 153 bis 5.- La contribución se causará en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera, gravadas por este impuesto y que afectan el territorio del estado, aplicando una cuota impositiva por el equivalente a tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por tonelada emitida de bióxido de carbono o la conversión del mismo, establecida en el artículo anterior.

Asimismo, para el caso de que se exceda la unidad de medida señalada en el párrafo anterior como tonelada, sin que las emisiones alcancen la siguiente unidad de medida o tonelada, la cuota impositiva por ese excedente se deberá calcular de forma directamente proporcional a la porción que exceda de la tonelada correspondientes.

Los contribuyentes podrán acreditar a su favor la inversión o ejercicio de recursos para conseguir, incorporar, mejorar o impulsar procesos o tecnología tendiente a emitir menores volúmenes de agentes contaminantes objeto de este impuesto. Igualmente se podrá acreditar a su favor el ejercicio de recursos o inversión en investigación y desarrollo en tecnología, procesos, o producción tendientes a la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera o al medio ambiente.

Del Entero

Artículo 153 bis 6.- Se hará el entero a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda al mismo, mediante los formularios que para esos efectos apruebe y publique la Secretaría.

De las obligaciones.

Artículo 153 bis 7.- Los contribuyentes estarán obligados a presentar aviso de inscripción ante la Secretaría y llevar un Libro de Registro de Emisiones Contaminantes, que estará a disposición de la Secretaría y de las autoridades estatales en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente del Gobierno del Estado de Nuevo León, para efectos de la gestión del mismo y como medio de control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental.

En el Libro de Registro de Emisiones Contaminantes se consignarán los datos siguientes:

- I. Volumen y tipología del combustible, así como materias primas consumidas y producidas;
- II. Composición química básica del combustible consumido y producido;
- III. Cálculo de las emisiones a la atmósfera realizado en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley;
- IV. En su caso, datos de concentración resultantes de los monitores o mecanismos de control o de medición instalados, y;
- V. Cualquier otro que se establezca mediante publicación reglamentaria por parte de la Secretaría o de las autoridades en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente del Gobierno del Estado.

Sección 11

Destino de los Impuestos

Artículo 153 bis 8.- Los ingresos que se obtengan de la recaudación de la contribución establecida en este capítulo, se destinarán al sostenimiento de las siguientes actividades, rubros, y obligaciones:

- I. Las previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley General de Cambio Climático;
- II. Al Fondo Estatal para el Cambio Climático;
- III. La prevista en el artículo 47 de la Ley de Transición Energética;
- IV. Obras, infraestructura y operación de los servicios de salud en el estado;
- V. Obras, infraestructura, preservación, manejo o remediación del equilibrio ecológico;
- VI. Acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables;
- VII. Procesos de investigación y desarrollo, construcción y equipamiento de laboratorios o centros de investigación para la disminución de emisiones contaminantes y afectaciones al medio ambiente, y;
- VIII. Generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible que protejan al ambiente.

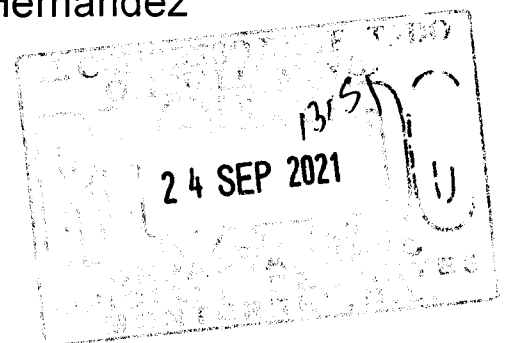
TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 30 de agosto del 2021


C. Felipe Enríquez Hernández



DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

298

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, **Felipe Enríquez Hernández**, [REDACTED]; en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: INICIATIVA DE REFORMA POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 60 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICOS PRIVADAS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleonenses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.

- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.
- Envío del “acuerdo” o “decreto” al ejecutivo para su publicación.
-

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa; si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

“los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

“Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

Es de señalar que la “baja por caducidad” de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información: Expediente: 12561/LXXV, presentada en sesion: 26 de marzo del 2018 y turnada a la comisión de: Legislación

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio

de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Banco Mundial, una asociación público-privada (en adelante APP) se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública¹.

World Bank, PPP. ¿Qué son las asociaciones público-privadas?
<https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/definicion>

En la Guía de Referencia de las Asociaciones Público-Privadas (2017) publicada por el Banco Mundial junto con diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP) definen como APP "un contrato a largo plazo entre un ente privado y una entidad gubernamental, para proporcionar un activo o servicio público, en el cual la entidad del sector privado asume un riesgo significativo y una responsabilidad de la administración, además de que la remuneración está vinculada al desempeño².

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "Las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado"³.

Entre los beneficios de dichos esquemas de inversión se han considerado los siguientes:

- El suministro de servicios públicos puede ser potenciado gracias al aporte en experiencia, conocimientos y tecnología por parte del sector privado.
- Contribuye a la diversificación de la economía y la mejora de la competitividad del país al impulsar los negocios y las industrias comprometidas en el desarrollo de los proyectos.
- Ayuda a solventar las limitaciones del sector público en beneficio de la ciudadanía.

² PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Reference Guide (2017), The World Bank Group and others. <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/83-what-is-the-ppp-reference-guide>

³ SHCP (S.F.) APP. <https://www.gob.mx/focir/acciones-y-programas/asociaciones-publico-privadas->

^aP.P.

- Al tratarse de proyectos de largo plazo, contribuye a acabar con el 'cortoplacismo' que en ocasiones afecta tanto al sector público como privado.
- Es una vía para que el sector privado introduzca tecnología e innovación para mejorar el suministro de servicios públicos a través de la eficiencia operativa
- Proporciona incentivo para que el sector privado entregue los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto acordado
- Como inserción de certeza dentro del presupuesto a través del tiempo, ya que se establecen gastos del proyecto de infraestructura en el presente y en el futuro
- Permite desarrollar las capacidades locales del sector privado a través de la propiedad conjunta con grandes empresas internacionales.
- Contribuye a que el sector privado aumente su participación gradualmente en las empresas estatales y en el gobierno (especialmente firmas extranjeras);
- Crea diversificación en la economía ya que hace al país más competitivo, e impulsa los negocios y la industria asociada mediante el desarrollo de la infraestructura.
- Complementa las limitaciones de las capacidades del sector público para satisfacer la creciente demanda de desarrollo de la infraestructura
- Contribuye a extracción al largo plazo del *valor por dinero (value-for-money)* a través de la transferencia apropiada de riesgos hacia el sector privado durante el periodo del proyecto- desde el diseño y construcción al mantenimiento y las operaciones.

En Nuevo León, estos esquemas son regulados por la *LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN*, misma que se publicó en el Decreto Número 85 en el Periódico Oficial del 10 julio de 2010. La citada legislación tiene por objeto regular y fomentar los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociación

público-privada que realicen el Estado o los Municipios con el sector privado o con otras Entidades gubernamentales, sector social e intermedias.

De acuerdo con la exposición de motivos de esta ley, encontramos que se estableció que los proyectos de asociación público-privada son una opción innovadora, distinta y viable de financiamiento en materia de infraestructura y de servicios públicos, diferente a los métodos tradicionales en los que se ha realizado la inversión pública.

También se señaló en su momento, que, para estar en condiciones más adecuadas de lograr estos proyectos, se requería contar con una ley que propiciara su realización y que al mismo tiempo fijara reglas precisas, claras y transparentes, en la participación privada en los proyectos.

Otro argumento, que se propuso en la iniciativa, fue el que permitiría crear condiciones de desarrollo para cada uno de los habitantes de Nuevo León, a través de alternativas que generen una mayor infraestructura, más y mejores servicios de calidad, atracción de inversiones productivas, generación de empleo, promoción de una mayor cobertura en la seguridad social y un impulso a la actividad económica, entre otros objetivos.

En la iniciativa de ley de la legislación en estudio, en relación con las propuestas no solicitadas, estableció lo siguiente:

También se propone incluir un Capítulo Tercero denominado, "De las Propuestas no Solicitadas", a fin de que la ciudadanía participe directamente proponiendo proyectos a realizar bajo el esquema que regula esta ley, sentando las bases para aprovechar debidamente la riqueza de las aportaciones ciudadanas que indudablemente fortalecen el trabajo de la administración pública, previendo en todo caso establecer reglas de carácter general para la presentación y

*análisis de estas propuestas.*⁴

⁴ Congreso del Estado de Nuevo León, LXXII Legislatura, Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Actualmente, esta ley establece en sus artículos 35 y 60 que dichos proyectos se adjudicarán por regla general mediante un concurso conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad. Ahora bien, por excepción se permite la adjudicación sin sujetarse al proceso de concurso en ciertos casos, a través de la invitación cuando menos a tres personas, como lo son: cuando no existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento; se realicen con fines exclusivamente de seguridad del Estado; existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, por mencionar algunas. De manera ultraexcepcional se indica en el último párrafo del numeral 60 de la ley que "Tratándose de proyectos no solicitados a que se refiere la presente Ley, que sean autofinanciables, podrá autorizarse la adjudicación directa al promotor."

Ahora bien, es de destacarse que, en la legislación federal en la materia, en su artículo 64 último párrafo contempla que no procederá la adjudicación directa tratándose de las propuestas no solicitadas a que se refiere el capítulo tercero de la Ley, situación que consideramos oportuna homologar en el estado, ya que, si bien es cierto, la presente ley representa un avance para el desarrollo de proyectos de infraestructura local, ésta puede ser perfeccionada, como se está proponiendo. No omitimos mencionar que entre ambas legislaciones existen coincidencias en su redacción.

Por lo tanto, creemos oportuna esta homologación del artículo 60 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Nuevo León respecto del artículo 64 de la legislación federal en la materia, a fin de garantizar mayor competencia, publicidad y transparencia en las adjudicaciones de proyectos de APPs, privilegiando la realización de concursos para la asignación de estos proyectos que representan una importante inversión del erario público.

En el mismo sentido que la presente iniciativa, en sus más recientes recomendaciones del Banco Mundial publicadas en el 2018 para la contratación pública de APPs⁵ se establece que las propuestas no solicitadas deben ser apropiadamente reguladas para prevenir un comportamiento contrario a la transparencia. De hecho, menciona una serie de buenas prácticas que se recomiendan seguir para asegurar la transparencia y la competencia en la contratación de estos proyectos, que se mencionan a continuación:

- La autoridad contratante evalúa los méritos de la propuesta no solicitada y asegura que esté alineada con las prioridades de inversión del gobierno.
- Hay un procedimiento de investigación y/o un análisis de pre factibilidad antes de evaluar plenamente la propuesta no solicitada.
- Si la propuesta está justificada, la autoridad contratante inicia un proceso de contratación competitivo para seleccionar a la persona con la que se realizará la asociación.
- La autoridad contratante otorga al menos 90 días a todos los posibles oferentes (además del proponente) para presentar sus propuestas.

Como podemos ver, las mejores prácticas internacionales recomiendan que la ley regule de manera clara las reglas que rijan los procesos de adjudicación de propuestas no solicitadas. En las mismas, claramente se establece que, para asegurar la transparencia y competitividad, las propuestas no solicitadas no deben adjudicarse de manera directa, sino que debe darse la oportunidad para que todos los posibles oferentes presenten sus propuestas y participen así en el proceso.

En consecuencia, por medio de la presente iniciativa pretendemos que nuestra Ley de Asociaciones Público-Privadas se actualice conforme a la legislación federal restringiendo la adjudicación directa de propuestas no

solicitadas. Sobre todo, buscamos que represente la competitividad que tanto ha caracterizado a Nuevo León, al adaptar nuestras prácticas de contratación pública con los estándares internacionales en la materia. Un marco regulatorio más transparente y competitivo genera un ambiente propicio para la inversión, además de que permite que los proyectos contratados por nuestros gobiernos contengan la mayor innovación posible por el mejor precio ofrecido en el mercado.

La presente iniciativa es emitida en congruencia con el objetivo 9 de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" de la Organización de las Naciones Unidas que consiste en "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación", particularmente con la meta 9.1 "Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos".

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO DE:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma por modificación el último párrafo del Artículo 60 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 60 ...

I a XI...

No procederá la adjudicación directa tratándose de las propuestas no solicitadas a que se refiere el capítulo tercero de la presente Ley.

TRANSITORIOS

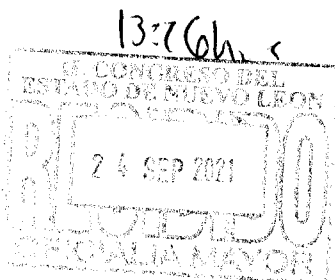
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente Decreto.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

C. Felipe Enríquez Hernández



392

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente. –

El suscrito, Felipe Enríquez Hernández,

[REDACTED] en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8, 36 fracción III, 68 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro ante esta Soberanía a presentar: **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN CAPITULO SEXTO Y UN ARTICULO 31 BIS 2 DENTRO DEL TITULO CUARTO DE LA LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.**

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso.

Al congreso corresponde, entre otras funciones establecidas en el artículo 63 de la Constitución:

- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas en caso necesario.
- Gestionar la solución de las demandas de los nuevoleonenses.

Para cumplir con su función legislativa, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso (RGIC) organiza al poder legislativo. De tal forma que, este, cuenta con los órganos de trabajo, soporte técnico y de apoyo necesarios para realizar el trabajo legislativo.

Por otra parte, en Nuevo León, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución tienen iniciativa de Ley todo diputado, autoridad pública en el Estado y cualquier ciudadano nuevoleonés.

Para la resolución de los asuntos que se presentan, en el Congreso se sigue el proceso legislativo que comprende, entre otros pasos, los siguientes:

- Turno a comisiones para su estudio.
- Elaboración del dictamen correspondiente.
- Discusión y aprobación del contenido y sentido del dictamen por parte de la comisión al cual fue turnado.
- Presentación del dictamen ante el pleno del Congreso.
- Discusión y aprobación del dictamen por parte del pleno de Congreso.

- Envío del “acuerdo” o “decreto” al ejecutivo para su publicación.

La realización de este proceso corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y el RGIC establece en diversos artículos la obligación de resolver los asuntos de su competencia a través de este proceso. Entre otros, se señalan los siguientes artículos del RGIC:

Artículo 24. *Son atribuciones del Presidente del Congreso, dar curso legal sobre los asuntos que son competencia del Congreso, turnando a Comisiones los que estuvieren debidamente integrados; requerir a las comisiones que presenten dictamen sobre los asuntos que se les hubiere encomendado; y de ser necesario emplazarles para que presenten dicho dictamen en día determinado, o en su caso, ordenar pasarlo a otra comisión.*

Artículo 108. *Una vez que se haya dado cuenta con alguna iniciativa, si es procedente se turnará a la Comisión que corresponda, para que con arreglo a los Artículos 47 y 48 de este Reglamento, la estudie y formule el dictamen respectivo...*

Artículo 67. *El Centro de Estudios Legislativos es el órgano de soporte técnico para la investigación y el análisis de los asuntos que son competencia del Congreso. Al Centro de Estudios Legislativos corresponde:*

X. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes que le soliciten las Comisiones.... Para la elaboración de los proyectos de dictamen contará con el número de Secretarios Técnicos que resulte necesario para desahogar los asuntos turnados a las mismas...

Artículo 51. *para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente.*

Artículo 53. *Los dictámenes deberán ser presentados al Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.*

Artículo 54. *Cuando las Comisiones no presenten sus dictámenes y el asunto así lo requiera, podrán ser emplazadas por el Presidente del Congreso.*

Artículo 56. *Durante el receso, las Comisiones continuarán el estudio de los pendientes hasta elaborar el correspondiente dictamen, que será presentado al Pleno en el período inmediato de sesiones...*

No obstante la responsabilidad del Poder Legislativo para resolver los asuntos que se le presentan por medio del proceso legislativo, este se ha visto interrumpido en el caso de diversos expedientes por la caducidad de su vigencia.

Dicha interrupción, tiene su origen en el artículo 46 del Reglamento que establece:

“los expedientes que tengan el carácter de iniciativas de Ley o Decreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

“Los exhortos, puntos de acuerdo y las denuncias de cualquier naturaleza, excepto las denuncias de juicio político y las solicitudes al Congreso que no constituyan actos jurídicos del Estado o los Municipios, que no hayan sido dictaminados en el

lapso de seis meses a partir de haber sido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado de asuntos pendientes, sin más trámite, por la Oficialía Mayor.”

Es de señalar que la “baja por caducidad” de expedientes, sin previo estudio y dictamen, no resuelve en definitiva los asuntos pendientes del Congreso, sino que representa una omisión legislativa al no cumplir con el proceso que debe tener toda iniciativa.

Por lo anterior, acudo ante este H. Congreso del Estado con el propósito de presentar la presente iniciativa, sin omitir, que esta fue presentada en forma original por el C. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES y dada de baja del listado de asuntos pendientes por caducidad. La presente iniciativa se puede identificar con la siguiente información:

Año: 2019 Expediente: 12825/LXXV

PROMOVENTE: DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, Y EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN CAPITULO SEXTO Y UN ARTICULO 31 BIS 2 DENTRO DEL TITULO CUARTO DE LA LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESIÓN: 02 de septiembre del 2019

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Presupuesto

Referencia:

Así mismo se señala que, se hace la transcripción de la propuesta del promovente original, dejando en salvaguarda sus derechos sobre el sentido y contenido de la misma. Lo anterior, para efecto de que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su responsabilidad legislativa exclusiva, resuelva sobre el presente asunto aplicando el proceso legislativo correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Legislar para el Desarrollo del Estado, resulta ser un gran compromiso de los Diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y ante la falta de apoyos por parte de la Federación a los municipios del área rural es que se requiere realizar una serie de esfuerzos que tiendan a mejorar los ingresos de los

municipios rurales privilegiando aquellos que por su situación geográfica, poblacional y actividad económica les resulta imposible poder generar una recaudación suficiente para hacer frente a las necesidades básicas de su población.

Siendo el municipio el primer contacto que tienen los ciudadanos con el Gobierno y de quien se espera que resuelva una serie de necesidades a las que constitucionalmente esta obligado como: seguridad, alumbrado público, pavimentación, recolección de basura por mencionar algunas, así como otras funciones como: traslado de personas a los servicios médicos, estudiantes a escuelas proveer primeros auxilios, así como apoyos a personas con diversas necesidades ya que la mayor parte de estos municipios su población presenta algún grado de pobreza lo anterior de acuerdo con la Medición de la pobreza a escala municipal 2015 publicada por el CONEVAL.

Municipio	Población	Porcentaje de población en situación de pobreza	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema	Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales	Porcentaje de población vulnerable por ingresos
Abasco	2,639	31.7	10.4	0.8	38.5	6.4
Aguaqueguas	2,439	10.2	9.5	0.7	66.5	2.5
Los Aldamas	1,292	28.3	27.6	0.7	61.2	1.4
Allende	34,360	18.5	17.5	1.1	35.5	8.8
Anáhuac	16,165	45.5	41.5	3.9	30.8	8.5
Apodaca	594,808	13.1	12.5	0.6	23.6	10.2
Aramberri	16,023	64.1	48.7	15.4	28.0	3.1
Bustamante	3,977	37.0	35.6	1.4	37.8	7.5
Cadereyta Jiménez	96,644	27.4	25.8	1.6	26.1	12.0
Carmen	38,104	21.6	20.7	0.9	20.8	19.2
Cerralvo	7,751	48.2	45.9	2.3	19.7	16.2
Ciénega de Flores	45,130	23.8	22.9	1.0	32.3	18.4
China	10,983	37.6	34.7	2.9	38.5	6.4
Dr. Arroyo	37,697	67.8	44.9	18.0	23.9	3.4
Dr. Coss	1,629	21.3	20.2	1.1	64.4	1.6
Dr. González	2,861	12.4	11.8	0.6	53.9	3.3
Galeana	38,771	61.0	47.1	13.7	28.5	1.4
García	254,727	19.2	18.0	1.2	27.2	10.9

San Pedro Garza	108,050	4.4	4.2	0.2	49.6	1.2
García						
Gral. Bravo	5,466	41.8	39.3	2.5	39.2	6.5
Gral. Escobedo	427,288	22.4	20.9	1.5	27.1	11.0
Gral. Terán	15,643	35.9	31.6	4.3	40.2	7.6
Gral. Treviño	1,044	18.8	18.0	0.8	60.4	1.5
Gral. Zaragoza	6,000	60.2	46.0	14.2	36.6	0.9
Gral. Zuazua	69,102	18.8	17.9	0.9	20.0	17.6
Guadalupe	681,375	16.7	15.8	0.9	28.8	8.1
Los Herreras	1,759	10.7	10.5	0.2	81.0	0.5
Higueras	1,508	15.7	14.7	1.0	46.7	3.3
Hualahuis	6,922	41.1	38.6	2.5	26.6	11.1
Iturbide	3,569	56.6	50.4	6.3	35.2	2.5
Juárez	342,400	23.0	21.4	1.6	25.2	12.3
Lampazos de Naranjo	5,237	39.7	37.0	2.7	37.7	5.1
Linares	78,593	32.8	30.0	2.8	24.6	18.1
Marín	5,631	23.4	22.7	0.7	23.3	19.6
Melchor Ocampo	955	3.7	3.7	0.0	70.1	1.4
Mier y Noriega	6,997	75.7	52.9	22.7	23.4	0.3
Mina	5,327	30.4	26.4	4.0	24.0	11.2
Monterreos	63,252	23.9	22.2	1.7	32.1	9.8
Monterrey	1,097,047	16.7	15.6	1.0	33.1	6.4
Parás	971	13.7	13.4	0.3	68.3	1.7
Pesquería	92,099	21.4	20.4	1.0	30.0	11.0
Los Ramones	4,468	36.1	34.7	1.8	53.0	2.6
Rayones	2,640	71.0	59.2	11.8	24.4	1.1
Sabinas Hidalgo	32,113	30.6	29.1	1.5	24.7	15.0
Salinas Victoria	57,975	23.5	21.5	2.0	32.8	9.6
San Nicolás de los						
Garza	417,423	11.4	10.9	0.5	28.3	7.5
Hidalgo	16,798	17.9	16.9	1.0	55.2	2.0
Santa Catarina	297,015	14.6	13.7	0.9	29.2	8.1
Santiago	40,649	19.0	18.1	1.0	30.5	9.2
Vallecillo	1,631	33.7	30.5	3.2	53.7	3.2
Villafidama	4,080	33.8	32.2	1.6	40.0	8.0

Información que dentro de los municipios nos permite establecer que existe una necesidad real no metropolitanos de apoyarlos con más recursos a fin de que puedan proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y equipamiento y realizar las obras públicas necesarias que permitan a sus habitantes poder mejorar su calidad de vida.

Con estas acciones las Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas de nuestro Estado, promoviendo una mejora

en la distribución de los ingresos entre los municipios

Es por lo anterior expuesto que se presenta a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con el objeto apoyar a los Municipios no Metropolitanos para que tengan la capacidad de poder realizar acciones en favor de mejorar la calidad de vida de sus pobladores por lo cual se propone la reforma por adición de un Capítulo Sexto y un artículo 31 bis 2 dentro del Título Cuarto de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Nuevo León, misma que se pone a su consideración para su aprobación el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma por adición de un Capítulo Sexto y un artículo 31 bis 2 dentro del Título Cuarto de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

CAPITULO SEXTO

DEL FONDO DE APOYO A LOS MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS

Artículo 31 bis 2.- Se crea el Fondo de Apoyo a los Municipios no Metropolitanos, cuyos recursos se aplicarán en la prestación de servicios, infraestructura, equipamiento

y en proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por los Municipios no Metropolitanos y su distribución en dichos proyectos dependerá de la prioridad que establezcan los respectivos Ayuntamientos.

El monto total del Fondo de Apoyo a los Municipios no Metropolitanos para efectos del cálculo de su distribución ascenderá a trescientos millones de pesos de acuerdo a lo siguiente:

I. Para efectos de lo anterior, el Congreso del Estado deberá establecer anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio que corresponda un monto suficiente el cual no podrá ser menor que el del ejercicio inmediato anterior a efectos de realizar los cálculos preliminares que sean necesarios;

11. Al inicio de cada ejercicio fiscal, se realizará el cálculo preliminar para determinar el monto de distribuir entre los Municipios no metropolitanos.

Para estos efectos, se entenderá como municipios no Metropolitanos aquellos establecidos que conforman la Zona no Metropolitana de conformidad con la fracción 111 del artículo 27 de esta Ley.

111. La distribución del monto entre los Municipios de la

Zona No Metropolitana de acuerdo a la fórmula que se establece para la distribución de las Participaciones referido en el artículo 14 fracción 1 de esta Ley, en forma separada, normalizando el grupo de Municipios como el 100 % respectivo, estableciendo un fondo de garantía de cuatro millones ochocientos mil pesos a aquellos municipios que una vez que se haya realizado el cálculo anterior no obtengan al menos dicha cantidad por lo que la cantidad resultante del garantía de distribución otorgada a los municipios deberá ser disminuida del monto inicial y el monto resultante se deberá repartir entre todos los Municipios no Metropolitanos de acuerdo a la fórmula que se establece para la distribución de las Participaciones referido en el artículo 14 fracción 1 de esta Ley, si de la nueva distribución resultare que uno o varios municipios no alcanzan el fondo de garantía establecido en la presente fracción se deberá otorgarle el mismo y las cantidades resultantes deberán ser disminuidas del fondo inicial y el monto resultante se deberá repartir entre todos los Municipios no Metropolitanos de acuerdo a la fórmula que se establece para la distribución de las Participaciones referido en el artículo 14 fracción de esta Ley, este procedimiento se realizará hasta que todos los Municipios no Metropolitanos, cuenten con al menos dentro de su distribución el fondo de garantía establecido en esta fracción.

En todo caso, las ministraciones de este fondo serán de forma mensual.

Los Municipios, una vez aprobados los proyectos de inversión por parte del respectivo Ayuntamiento deberán:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes los recursos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

b) Proporcionar al Ejecutivo del Estado la información que les fuere requerida respecto a los proyectos de inversión o sobre la aplicación de los recursos asignados.

e) Asegurarse que las obras que realicen sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

d) En los casos aplicables, incorporar en las obras que realicen las previsiones necesarias para facilitar el acceso, circulación y uso de espacios e instalaciones para personas con discapacidad, ajustándose a las disposiciones de las leyes vigentes y a las Normas Técnicas que al respecto emita la Secretaría de

Infraestructura del Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2020

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del 2021

C. Felipe Enríquez Hernández

